

ciudadana

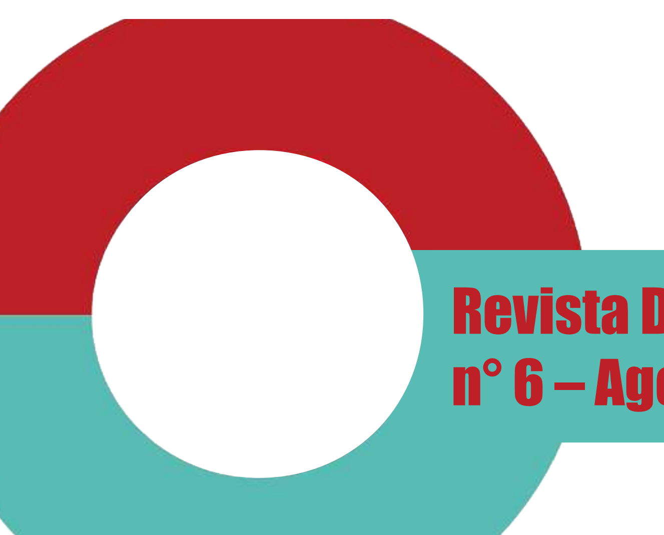
REVISTA DIGITAL
#6

Agosto 2021

LO DIGITAL Y LA DISPUTA POR EL FUTURO

Publicación digital del proceso regional en América Latina y el Caribe
hacia un Foro social de Internet (FSI)

internetciudadana.net



Revista Digital "Internet Ciudadana" n° 6 – Agosto 2021

ÍNDICE

Publicación digital del proceso regional en América Latina y el Caribe hacia un Foro Social de Internet (FSI).

Como foro temático del Foro Social Mundial (FSM), el Foro Social de Internet es una iniciativa popular y abierta, cualquier persona motivada a defender el interés público puede sumarse, el único requisito es adherir a la_Carta de principios del FSM_y sus principios anti-neoliberales.

Para inscribirse en la lista de correos del proceso de intercambio regional latinoamericano-caribeño, o para enviar colaboraciones a esta publicación pueden escribir a: fsi-alc@internetciudadana.net

Para más información:
www.internetciudadana.net

Equipo Editor
Francois Soulard
Sally Burch
Javier Tolcachier

Diagramación
Realizada con software libre

Fotos de portada e interior
Imágenes bajo licencia *Creative commons* publicadas en *Flickr, Unsplash, Pixbay, Freepik*

Créditos
Con el auspicio de WACC y de Pan para el Mundo (Servicio Protestante para el Desarrollo)



A modo de editorial

s ya prácticamente imposible definir con precisión la frontera de aquello que aún permanece no alcanzado por la digitalización.

La dificultad en el discernimiento de esta progresiva desaparición de los límites se origina en el hecho de que, por un lado, cada vez más actividades son capturadas por la tecnología digital, pero también en la pretensión de la poderosa maquinaria financiera que la impulsa de pasar lo más inadvertida posible, extrayendo ganancias y socializando riesgos.

De allí que desde el espacio Internet Ciudadana emprendimos durante 2020 y buena parte de este año la tarea de dilucidar impactos sectoriales de esta revolución tecnológica en curso en campos fundamentales de actividad humana como el trabajo y el empleo, la educación, la comunicación, el campo y el agro y el conjunto de derechos digitales necesarios para garantizar la protección de las personas.

Se sumaron a dicha tarea cientos de agrupaciones y personas de los más diversos ámbitos. Confluyeron así profesionales de la tecnología, movimientos campesinos, comunicadores, activistas digitales, profesores y estudiantes, conformando un primer impulso crítico latinoamericano frente al arrollador e inconsulto avance de esta matriz económica centrada en el Norte global.

Los estudios y debates llevaron a primeras conclusiones y documentos, a los que nuestros lectores pueden acceder en el repositorio de producciones de Internet Ciudadana. Pero además de identificar problemáticas y formular posibles alternativas, era necesario hacer más. Se dio así continuidad a la labor de los grupos de trabajo temáticos con intensas y vibrantes Jornadas que permitieron expandir la convocatoria y a la vez, profundizar el diálogo sobre las posibilidades de incidencia ciudadana.

Uno de los principales núcleos de dicha acción, afirmaron los participantes de las Jornadas "Utopías o distopías. Los Pueblos de América Latina ante la era digital", debe estar constituido por la sensibilización de amplios sectores, sobre todo de espacios organizados, como precondición de una actuación cada vez más consciente en relación a los nuevos desarrollos y sus implicancias.

Sensibilización que incluye tanto la divulgación de las distintas aristas que trae consigo la dirección actual de digitalización como también un programa formativo en modalidades tecnológicas más libres y no dependientes de la lógica mercantilista dictada por las transnacionales del rubro.

Al mismo tiempo, la coyuntura sanitaria global y la veloz dinámica de los acontecimientos nos conminan a seguir profundizando y reflexionando. A este propósito sirve también la presente edición de nuestra revista.

Equipo editor



¿Batalla cultural o guerra cognitiva?

Por François Soulard

Avanzar en un manejo más soberano de las redes informáticas y desarrollar capacidades estratégicas forman un horizonte cardinal para avanzar hacia una Internet ciudadana. Los debates del Foro social de Internet y otras dinámicas como el Digital New Deal resaltaron estos horizontes. Algunos analistas, entre ellos el chino Wang Yukai[1] (asesor del gobierno chino) o Laurent Bloch[2] (instituto de Iconomia en Francia) aportaron sobre los nuevos modos de construcción de la potencia en el ciberespacio. La participación en la infraestructura informática y la industria electrónica es un factor de peso en la capa material. En la dimensión lógica de las redes, es determinante tener un control genuino del software y de los algoritmos. En el terreno de la cultura y de la regulación, el protagonismo internacional, la protección de las redes y los derechos, así como también la formación son primordiales. En estas cuestiones, la voluntad colectiva y la dimensión cultural son aspectos medulares. Estas últimas forman una asimetría actualmente muy favorable a grandes corporaciones y a un grupo de estados activamente involucrados en el espacio digital.

La importancia del factor cultural tiene su correlato en el campo de la batalla informacional que se da en América Latina. No es novedoso recalcar que el nivel de confrontación comunicacional y mediático es particularmente intenso en la región, comparable en cierta medida con niveles que se observan en contextos bélicos. El lema de "territorio en paz" proclamado en 2011 por los representantes de la CELAC y la UNASUR ya contrastaba en la realidad con la pax americana y las agudas confrontaciones no militares que se desarrollaban de forma irregular. La concentración mediática y su débil regulación, la penetración de las redes con la

1 How China Becomes A Cyber Power https://www.forbes.com/sites/adamsegal/2014/07/02/how-china-becomes-a-cyber-power/

2 Hégémonie des États-Unis sur l'Internet https://www.diploweb.com/1-Hegemonie-des-Etats-Unis-sur-l-Internet.html

telefonía móvil y el auge de Internet a partir de los años 2000, así como también la alta conflictividad social, incentivaron esta tendencia. A partir de 1989, el concepto de guerra de cuarta generación (o guerra híbrida) junto con la noción de poder blando habían extendido lo que Quijano, Prebisch, Furtado, Escude y otros calificaron como aristas de dominación en una de las principales áreas de influencia de las potenciales occidentales.

Es un hecho que desde 1990, apogeo de la hiperpotencia norteamericana y luego de la guerra de Irak en la cual la manipulación informacional alcanzó un umbral inédito, la conflictividad ha girado hacia modalidades más irregulares. Esta evolución ha elevado exponencialmente la confrontación en el espacio informacional. Amplió los modos de construcción de influencia. La dimensión social de la conflictividad pasó a ocupar una posición decisiva. La relación binaria amigo-enemigo heredada de la bipolaridad tendió a evolucionar hacia una relación dominante-dominado (o aliado-adversario) que se combina con nuevas formas de confrontación en el espacio informacional. Como lo resalta Christian Harbulot de la Escuela de guerra económica en Francia, esta combinación se volvió una de las claves estratégicas de construcción de potencia en nuestros tiempos, no solamente en la esfera geopolítica sino también en la económica.

En América Latina, los pueblos de la región saben muy bien lo que significa intentar consolidar un estado-nación siendo expuesto al incesante flujo de actos moralizadores, condicionantes y a veces desestabilizadores que se emprenden bajo el semblante cínico y monolítico de la libertad político-económica destilada por la potencia norteamericana. Desde los años 1950, los Estados Unidos habían emprendido consolidar su poder en el campo tecnológico en pos de crear una relación de dependencia duradera con sus aliados y ganar un avance decisivo en las tecnologías de la información. Como parte de la disputa cognitiva, la influencia norteamericana se mide, al margen de la hegemonía militar, económica y política, por la cooperación en el sistema inicial de generación de conocimientos (producción científica y diseño de la formación inicial de alto nivel). En otro terreno, se traduce por el incentivo de una infraestructura de comunicación, de productos culturales y de medios afines, actuando a menudo como vector de oposición política debido a su peso informativo.

Pero lejos de ser un recurso exclusivo de los dominantes, muchísimos actores de la región en el campo de los dominados ya practican, también en el silencio relativo, estas nuevas formas de persuasión. El centro de la escena en materia de manipulación político-mediática ha sido la desinformación en los procesos electorales y las operaciones de lawfare que se comparan a veces con golpes blandos. El caso de la ex-presidenta Dilma Roussef y Luis Lula da Silva en Brasil fueron emblemáticos. Pero varios referentes políticos, cualquieras sean su color político, resultaron enredados en este tipo de operación que articulan estrechamente ofensiva informacional, jurídica y política (el último ejemplo es la ex-presidenta Jeanine Añez en Bolivia y fue señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[3]).

A otro nivel, el ciclo progresista en la región ha promovido formas de integración que incorporaron una disputa más ofensiva del predominio de Washington en la agenda regional y las instancias multilaterales. Los dirigentes del MERCOSUR, de la UNASUR, de la CELAC, del Foro de São Paulo o en menor medida del Grupo de Puebla, afirmaron después del no al ALCA en 2006 un manejo contra-hegemónico del destino regional, sin por tanto borrar las adversidades internas. Pese a la fractura estructural de las primeras, los dos últimos siguen influyendo en las relaciones de fuerza psicológica que se da entre campos políticos. En el caso de Cuba, Venezuela y del

3 https://cedib.org/post_type_titulares/cidh-rechaza-medida-cautelar-a-anez-y-observan-sesgo-politico-pagina-siete-30-3-21/

bloque ALBA en general, las estrategias de influencia del primero en las altas esferas institucionales de los demás son efectivas y garantizan una viabilidad geopolítica a La Habana. Frente a las presiones externas, tanto Nicaragua, como Bolivia y Venezuela han puesto de pie un ejército informacional (en el cual participa Telesur) operando en un ecosistema en red para compensar su debilitamiento interno y alterar las percepciones.

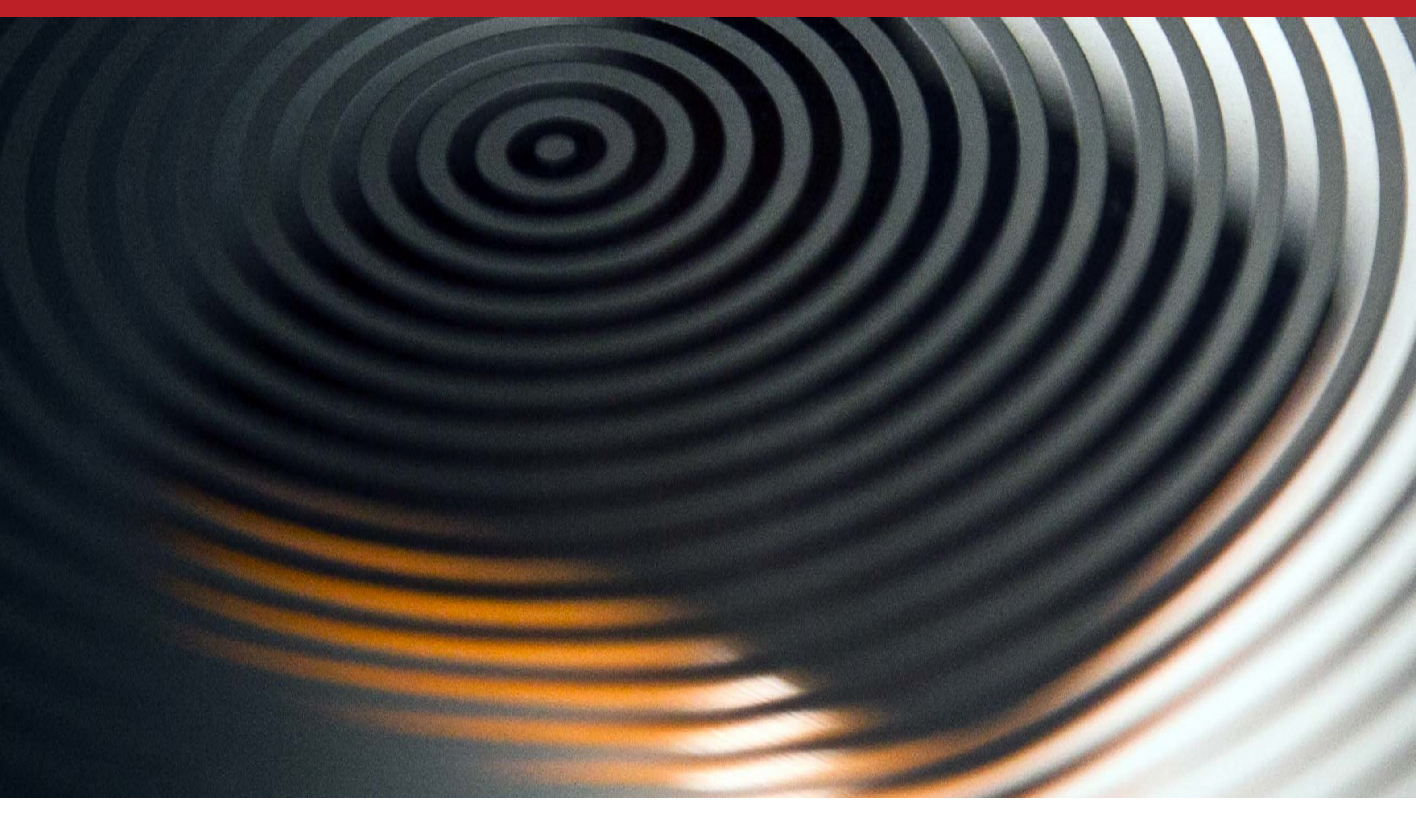
En otras áreas, podríamos mencionar las potentes maniobras de los lobbyings corporativos, grupos ilícitos, financieros y judiciales que salen a la luz en función de los escándalos o crisis de turno a la par de los asuntos de corrupción en la esfera política. Los casos de los Panama Papers, Lava Jato y Odebrecht, entre muchos otros, han dado una idea del continente oscuro de influencia y de criminalidad que opera por encima y por debajo de la superficie institucional. No es exagerado decir que el peso de estas estructuras de influencia en América Latina es tal que sus impactos en materia de corrupción y de seguridad puede llegar a romper el equilibrio institucional de un país. Sea para mantener una hegemonía de dominante a dominados, debilitar la influencia de los dominantes desde el lugar de dominados, modificar la relación de fuerza con un adversario, moldear la reputación de ciertos sectores, cada actor hoy, con mayor o menor grado de profundidad e inteligencia, se involucra en esta nueva guerrilla comunicacional.

Los denominadores comunes que podemos resaltar en este campo son varios. Es posible para los actores dominados modificar las relaciones de fuerza apuntando las debilidades del adversario, la ofensiva dando mejores resultados si es emprendida con inteligencia. Más que instrumentos comunicacionales, se trata de concebir verdaderas estrategias, lo que implica tener un objetivo claro, una identidad consolidada y estar organizado. Las intencionalidades son más envueltas y disimuladas que directas y frontales, si bien ambas modalidades se complementan, lo cual implica como corolario disponer de estrategias de defensa. Los vectores comunicacionales son muchas veces indirectos y más interrelacionados, mientras una amplia gama de actores están involucrados. Los contenidos morales, identitarios o históricos están intensamente movilizados, de ahí la importancia de los temas vinculados a la corrupción y la reputación de las personalidades puúblicas.

Finalmente, es importante notar que si bien los enfrentamientos informacionales son violentos y entramados en todos planos sociales, económicos y políticos, no parece existir todavía un cuerpo conceptual muy consolidado para abordar estas estrategias. Al famoso “bombardeo informacional” que los oprimidos denuncian no responde todavía un esfuerzo intelectual dando al fenómeno toda su dimensión de guerra cognitiva. La influencia sigue abordada desde los términos clásicos, mientras la estructura compartimentada de las organizaciones permite difícilmente integrar los temas informacionales con otras dimensiones. Basta por ejemplo comprobar como la desinformación en los medios y redes sociales está abordada localmente desde el ángulo esencialmente normativo[4]. En este terreno, el activismo digital tiene un interesante papel para aportar en términos de aggiornamiento.

François Soulard *es comunicador social, migrante franco-argentino. Coordina la plataforma de comunicación Dunia.*

4 Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales, OEA,RELE, CIDH http://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf Desinformación en Internet en contextos electorales de América Latina y el Caribe, AlSur https://www.alsur.lat/reporte/desinformacion-en-internet-en-contextos-electorales-america-latina-el-caribe



EN FOCO

La lucha digital por la soberanía alimentaria

por Flavia Piccoli

Este artículo resume algunos puntos de la problemática digitalización y soberanía alimentaria en Latinoamérica extraídos de una investigación realizada en el marco de un programa de maestría en la Universidad de Hohenheim (Alemania).

A la hora de pensar en una soberanía alimentaria asistida por las herramientas que brindan las tecnologías digitales, es necesario involucrar las perspectivas de los diversos actores que protagonizan las luchas en el campo, en las ciudades, ya sea desde la producción y distribución de alimentos, o mediante el activismo y la militancia en las calles. Esta crítica resulta hoy más que necesaria en nuestra región principalmente por tres motivos: primero, porque la discusión sobre digitalización necesariamente involucra el debate de los datos digitales como bienes comunes; segundo, porque Latinoamérica es uno de los principales focos de proyectos extractivistas en el mundo; y tercero, porque la brecha digital se ha profundizado como consecuencia de la pandemia, poniendo de manifiesto que todavía hay un largo camino que recorrer hasta lograr un acceso equitativo a Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación.

Digitalización y disrupción de sistemas agroalimentarios

Hace tiempo se ha advertido cómo las tecnologías digitales han posibilitado el avance de la abstracción y consecuente manipulación de la vida en una dimensión completamente nueva, que supera las limitaciones impuestas por el espacio en el mundo "real". En los sistemas agroalimentarios atravesados por la digitalización se pueden identificar principalmente dos niveles importantes de abstracción: de los alimentos y entre las personas.

Prácticas convencionales actuales de producción y distribución de alimentos, las cuales avanzan a costa de los pueblos y de sus territorios, han ido progresivamente despojando a las personas de una relación íntegra y saludable con los alimentos y la nutrición. No sólo muchxs campesinxs están hoy desconectadxs de los alimentos como el fruto de su trabajo, sino todas las personas en general se encuentran alejadas del significado de la comida y su relación con la Naturaleza y sus ciclos, sin mencionar cuán deteriorados están hoy los ecosistemas a causa de las prácticas del agronegocio. La fuerte conexión a un territorio, a un suelo que sustenta el crecimiento de alimentos y otros recursos necesarios para la vida, han sido el motor inicial de las reivindicaciones por la soberanía alimentaria. Sucede pues que la "datafícación" de elementos constitutivos de los sistemas agroalimentarios (como son la tierra, los ciclos naturales del suelo y el clima, y las diversas especies vegetales y animales)para su consecuente cuantificación, almacenaje, análisis y financiarización, conlleva un avance hacia la abstracción de estos elementos, lo cual se presenta como un enorme obstáculo para lograr la soberanía alimentaria de los pueblos.

Existe a su vez un segundo nivel de enajenación, y tiene que ver con la progresiva normalización de la comunicación digital. En un contexto reciente de distanciamiento social obligatorio cabe preguntarse qué implicancias tiene la creciente frecuencia con la que nuestros diálogos acontecen mediados por la tecnología digital, reflexionando primeramente sobre qué es lo que le da sentido a una conversación o a la reproducción de un discurso, y pensando seguidamente cómo esto influye en la construcción de soberanía alimentaria en el presente. En muchos sentidos, la comunicación digital es decididamente una poderosa herramienta para el activismo y la coordinación transnacional: intercambiar información, debatir ideas, organizar proyectos y campañas, dividir y asignar tareas. Incluso en áreas de menor densidad poblacional, los canales digitales de comunicación y difusión tienen potentes implicancias en el trazado de redes solidarias o en, por ejemplo, la seguridad otorgada por la visibilidad de activistas en territorios de conflicto. Sin embargo, al mismo tiempo existe un elemento distintivo que está relacionado con la presencia física de otros cuerpos y de su energía, factores estrictamente necesarios en las luchas socioambientales. ¿Qué tan exitoso puede ser el ejercicio de la resistencia cuando no hay efectivamente cuerpos presentes, cuerpos que ponen presión y encarnan el rechazo masivo a la destrucción de los territorios y a la opresión de los pueblos?

La desigualdad de raíz

Una cuestión central en la sociología de la tecnología es la desigualdad, entendida como el acceso inequitativo a recursos materiales e intelectuales. La desigualdad en Latinoamérica es evidente a niveles que son sumamente complejos no sólo porque son multi-causales y de orígenes antiguos, sino porque están entretejidos en una compleja trama histórico-política: la desigualdad existe entre clases sociales, entre géneros, entre áreas rurales y urbanas, e incluso entre militantes mismxs de la soberanía alimentaria. Cualquier tecnología que se inserte en una sociedad con semejantes niveles de desigualdad no puede tener otro resultado que no sea el de profundizar la brecha entre las personas, enriqueciendo inmensamente a unos pocos y marginalizando aún más a grandes sectores de la población.

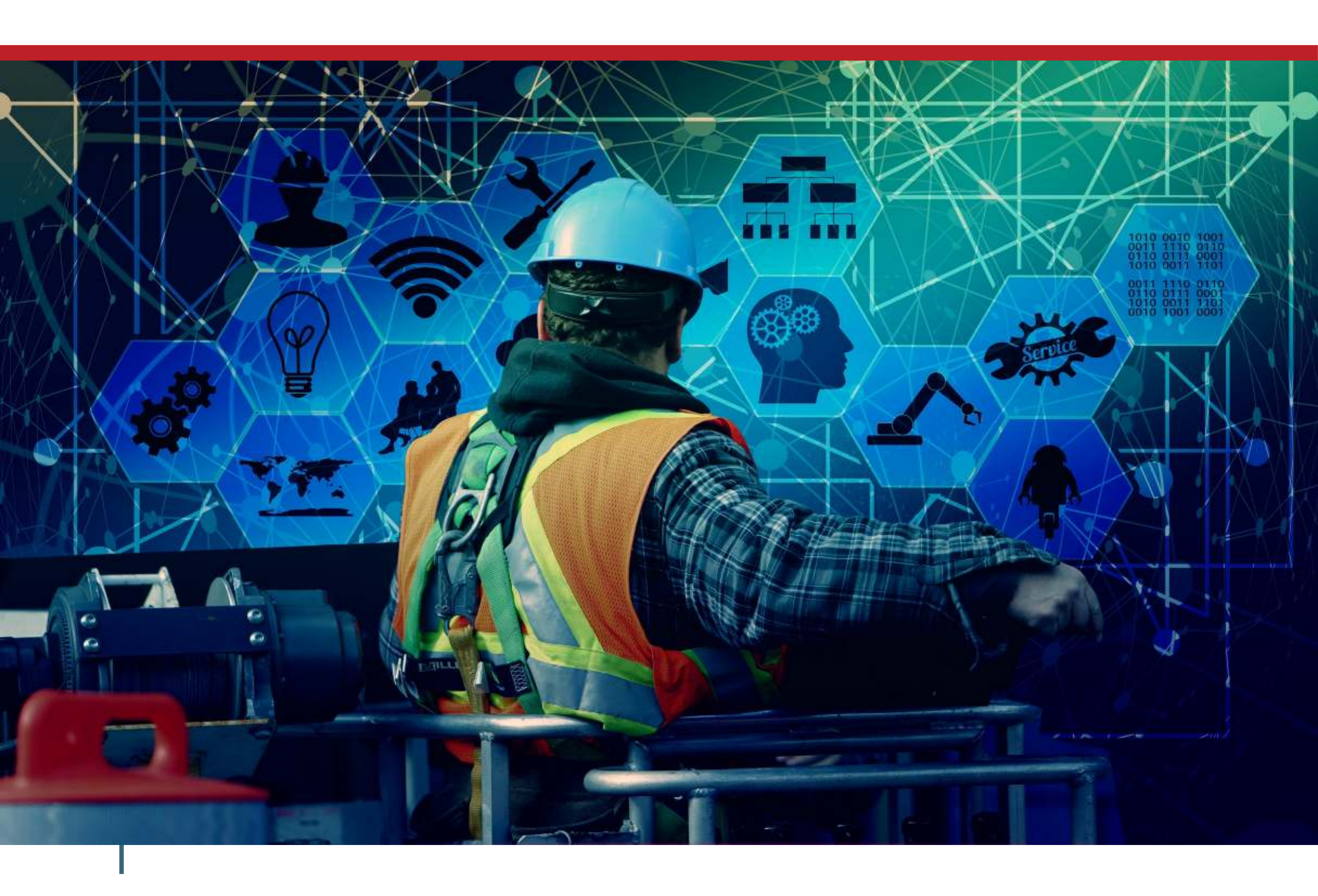
Existen actualmente otras tecnologías que se reconocen mucho más urgentes que el acceso universal a la digitalización, como por ejemplo infraestructura básica (caminos, maquinaria agrícola mecanizada, etc.), sumamente necesaria para asegurar la producción y distribución de alimentos sanos para los pueblos, y que sigue sin estar garantizada. Aún hoy hay, en muchísimas regiones latinoamericanas, zonas que son altamente productivas bajo un modelo de producción agroecológica pero que se encuentran sistemáticamente desconectadas de centros de consumo urbanos, imposibilitando así el avance de propuestas de soberanía alimentaria. Por otro lado, la ciberseguridad o la recolección de datos en Internet representan una gran preocupación en sectores urbanos, donde la población utiliza tecnologías digitales diariamente y para una gran variedad de actividades. Esta preocupación es totalmente válida y pertinente al debate sobre digitalización, pero no se manifiesta de igual manera para personas en sectores rurales, por ejemplo. Y, para mencionar un nivel más de complejidad, todavía no se ha profundizado el análisis que considera las particularidades de las identidades de pueblos originarios en América Latina y sus cosmovisiones y temporalidades respecto las disrupciones de las tecnologías digitales en sus comunidades.

Conclusiones preliminares

Aún carecemos de profundidad en la crítica de visiones sobre desarrollo, productivismo y lucha de clases que incorporen conceptos esenciales de la soberanía alimentaria relacionada a los territorios y los bienes comunes. ¿Existe un riesgo de desarticulación para el movimiento de soberanía alimentaria a causa de la imposibilidad de empatizar con objetos, territorios o sujetos abstractos? ¿Cómo podemos coordinar la lucha por la soberanía alimentaria en el mundo virtual de manera que se complementen las luchas en el mundo “real” o físico?

La búsqueda de reconexión con la Naturaleza y con las personas que el paradigma de soberanía alimentaria ha iniciado nos obliga a encontrar caminos para evitar un nuevo nivel de distanciamiento, y dinámicas que nos convoquen y nos comprometan a participar de la producción, distribución, o preparación de alimentos, aún (o precisamente más) cuando estas tareas estén auxiliadas por herramientas digitales.

Flavia Piccoli *es Licenciada en Ciencias del Ambiente, MSc Protección ambiental y producción de alimentos*



LETRA CHICA, IMPACTO GRANDE

Concebidas por y para las grandes tecnológicas

Las reglas del comercio digital

por Deborah James

Las normas propuestas permitirían a las grandes empresas acelerar su apropiación de la productividad de los/as trabajadores/as y las pequeñas empresas en todos los países, lo cual es una característica de la economía mundial contemporánea.

La digitalización está transformando la forma en que trabajamos, nos comunicamos, comemos, vivimos y conducimos nuestras relaciones sociales y familiares. La tecnología puede estimular la prosperidad y el desarrollo, acercarnos los unos a los otros y ayudar a construir medios de vida sostenibles. Pero también puede limitar el desarrollo, exacerbar las desigualdades y tener un impacto destructivo en el empleo y la organización social. La posibilidad de que los países, los trabajadores/as y los/as consumidores de todo el mundo se beneficien o, por el contrario, los beneficios sólo recaigan en una pequeña minoría, dependerá de las reglas que rigen la evolución de la digitalización a lo largo del tiempo.

Una de las mejores "inversiones" que pueden hacer las empresas es cambiar las reglas bajo las que operan, con objeto de extraer mayores beneficios económicos y al mismo tiempo impedir que sus competidores operen en igualdad de condiciones. Las

empresas poderosas se han valido durante mucho tiempo de los acuerdos comerciales para fijar normas que promueven su “derecho" a obtener beneficios, al tiempo que limitan la capacidad de los gobiernos para regular las actividades empresariales en aras del interés público, y a menudo lo han hecho al margen de los canales democráticos normales.

La Organización Mundial del Comercio (OMC), con sede en Ginebra, es el órgano mundial que establece normas sobre el comercio internacional y cuenta con 164 países miembros. Cuando se fundó en 1995, los nuevos acuerdos pactados en su seno otorgaron derechos a las industrias y sectores dominantes en ese momento, como la agricultura, las finanzas, los servicios, los productos farmacéuticos y las manufacturas. Las industrias tecnológicas carecen de un acuerdo de este tipo en el marco de la OMC y desean que se fijen normas similares con objeto de regular la digitalización, que está transformando actualmente la economía mundial. En particular, se trata de regular la gobernanza del recurso más valioso hoy en día: los datos.

Los datos son la sangre vital de la economía digital. Las empresas que dominen la Inteligencia Artificial (IA) en sus sectores de actividad, serán las que dominarán las correspondientes industrias. La IA depende de enormes conjuntos de datos para entrenar a las máquinas que aprenden a tomar decisiones. La valoración de las mayores sociedades de capital del mundo en términos de capitalización bursátil es tan alta porque son recolectoras de datos, y los inversores conocen el valor de los datos para generar beneficios futuros. Incluso las sociedades que no han obtenido beneficios pueden seguir obteniendo capital de riesgo si su modelo de negocio parece ponerlas en condiciones de recopilar datos de manera que están bien posicionadas para dominar su industria.

En este momento, una pequeña minoría está tratando de utilizar su excesivo poder, aprovechando prácticas antidemocráticas en la formulación de las políticas comerciales, para reescribir las reglas de la economía mundial y otorgarse a sí misma nuevos “derechos" a conseguir ganancias, al tiempo que limita la tutela del interés público y los beneficios que la nueva “economía de datos” puede aportar al conjunto de la sociedad. Cinco de las seis empresas más grandes del mundo – Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft – son empresas transnacionales (ETN) de alta tecnología, con sede en los Estados Unidos; y, al igual que otras empresas de alta tecnología que operan en distintos sectores, entre ellos la logística del transporte, las telecomunicaciones, las finanzas y la agroindustria, están presionando a los gobiernos para negociar nuevas normas, bajo el disfraz del denominado “comercio electrónico", en el marco de la OMC y de otros acuerdos comerciales bilaterales o regionales recientes.

Los partidarios de las normas de comercio digital destacan las oportunidades que brindarían a los empresarios y empresarias, especialmente a las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo.

Pero las normas propuestas por las grandes tecnológicas van mucho más allá del comercio electrónico y tienen repercusiones en todos los aspectos de las economías nacionales así como en la economía mundial, incluso para los países que no participan en esta última. Si se establecen, esas normas podrían dar lugar a la liberalización completa de toda la economía (digital).

En realidad, las grandes empresas tecnológicas han propuesto nuevas reglas para consolidar su modelo comercial explotador, incluidas, entre dichas reglas, las que apuntan a: obtener derechos de acceso a los mercados a nivel mundial; extraer y controlar datos personales, sociales y comerciales en todo el mundo; arraigar

sólidamente la desregulación y evadir la regulación futura; acceder a una oferta ilimitada de mano de obra que ha sido despojada de sus derechos; ampliar el poder de las empresas a través de monopolios; y evadir el pago de impuestos.

Por lo tanto, las normas propuestas permitirían a las grandes empresas acelerar su apropiación de la productividad de los/as trabajadores/as y las pequeñas empresas en todos los países, lo cual es una característica de la economía mundial contemporánea. Las normas inhibirían la capacidad de todos los países para promover la innovación digital a fin de fomentar la prosperidad compartida de cara al futuro. En particular, asistimos a un intento de proteger el poder monopolístico de los gigantes de la tecnología. Todo ello limitaría gravemente la capacidad de los países en desarrollo de utilizar la industrialización digital para sacar a sus poblaciones de la pobreza, vulneraría la privacidad de nuestros datos personales, pondría en peligro nuestra seguridad y aumentaría los riesgos de la "discriminación digitalizada", erosionando nuestros derechos humanos, sociales, económicos y civiles. Por otro lado, se amenazaría la prestación de servicios públicos eficaces, de los que tanto dependen nuestras sociedades, y se inhibiría el papel esencial de la supervisión normativa de interés público, cuya importancia es cada vez más evidente. Otro objetivo de las propuestas es lograr que las empresas más grandes y poderosas puedan evitar contribuir a la base impositiva de las sociedades en las que operan y obtienen beneficios. Y las nuevas normas también garantizarían que el recurso más valioso del mundo, los datos, quedaría privatizado y monopolizado por las grandes empresas permanentemente, en lugar de ser utilizado como un bien público para promover la prosperidad social compartida.

Así pues, las normas propuestas representan una grave amenaza para el desarrollo, los derechos humanos, el trabajo y la prosperidad compartida en todo el mundo, y son la antítesis misma del tipo de políticas necesarias para frenar el crecimiento canceroso del poder de las grandes tecnológicas.

El 1 de enero de 2020, marcará el 25º aniversario de la fundación de la OMC. En el tiempo transcurrido desde su fundación, mientras que la pobreza mundial ha disminuido, la desigualdad ha crecido dramáticamente, y nuestras prácticas de consumo están amenazando la estabilidad de las condiciones climáticas en las que puede prosperar la vida humana. Los defensores de la OMC afirmarán que no son culpables de los bajos niveles de reducción de la pobreza en muchos países ni de la desigualdad o la devastación del clima, aunque con frecuencia sí atribuyen al sistema de la OMC la reducción general de la pobreza y el crecimiento económico a nivel mundial.

Sin embargo, la reducción de la pobreza a nivel mundial en este período ha tenido lugar principalmente en China, que ha seguido una trayectoria económica muy diferente de la adoptada en la OMC, y la parte restante de esa disminución corresponde mayoritariamente a los países que comercian con China.[1]

Los países industrializados se enfrentan ahora a crisis económicas y democráticas debido a los efectos negativos de varias décadas de políticas económicas neoliberales, impuestas internacionalmente a través de acuerdos comerciales. Sin embargo, sus negociadores comerciales siguen esforzándose por afianzar un conjunto de normas que manipularían toda la economía digital del futuro a favor de las empresas gigantes.

Tras años de resistencia a este programa por parte de la gran mayoría de los países en desarrollo que son miembros de la OMC, un grupo de unos 76 países, a pesar de habérseles negado un mandato de consenso para hacerlo, acaba de iniciar conversaciones con el objetivo de lograr un acuerdo vinculante sobre el comercio

digital en el marco de la OMC. Estos estados están constantemente cabildeando y presionando a los países en desarrollo no participantes para que se unan a sus filas.

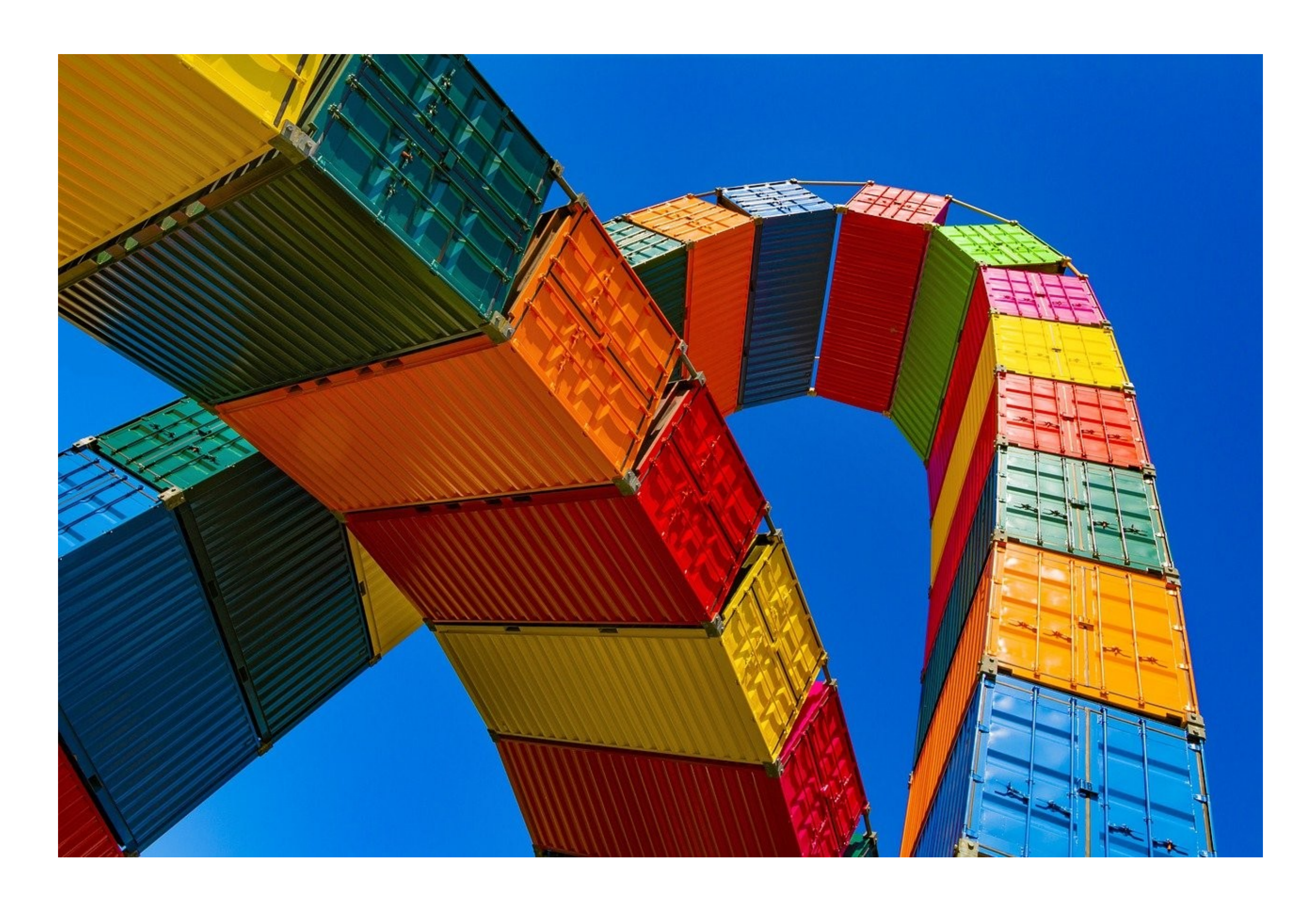
Por supuesto, el comercio electrónico puede ser una fuerza de creación de empleo y desarrollo, y ciertamente tiene el poder de potenciar la innovación, aumentar las opciones de los/as consumidores/as, conectar a productores y consumidores remotos y aumentar la conectividad mundial. Pero esto no es lo mismo que tener reglas globales vinculantes para toda la economía digital, elaboradas por las grandes tecnológicas en beneficio propio.

Garantizar que la tecnología se despliegue para servir al bienestar de la humanidad y del conjunto del planeta y para impulsar la prosperidad compartida sólo será posible si ejercemos nuestros derechos democráticos y evitamos que las grandes tecnológicas amañen las reglas de la futura economía mundial para aumentar su propio control privado y sus ganancias.

Deborah James *es directora de programas internacionales del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR; www.cepr.net), con sede en Washington DC, y coordinadora de la red de organizaciones de la sociedad civil Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS).*

Artículo tomado del resumen ejecutivo del libro *Las reglas del comercio digital: una nueva y desastrosa constitución para la economía mundial, concebida por y para las grandes tecnológicas*, Fundación Rosa Luxemburgo, julio 2021. (La edición en inglés fue escrito en 2019 y publicado en 2020).

Publicado originalmente en ALAI





Telecomunicaciones: Neutralidad en la red y zero rating

por Alfredo Moreno

El principio de neutralidad de la red se ha consolidado como un derecho humano en el marco del derecho internacional y protege a una multiplicidad de los mismos. Sin embargo, en la actualidad, este principio se ve amenazado por diferentes prácticas desarrolladas por los proveedores de conexión a internet. Puntualmente, el zero rating, que constituye una forma de discriminación "positiva" que emplean mediante acuerdos con los proveedores de contenidos, y que consiste en permitir a los usuarios/clientes de internet acceder a servicios, aplicaciones y contenidos sin afrontar un incremento en el consumo de sus datos.

Se conoce como **neutralidad de la red** *(Net Neutrality)* al principio que promueve que todo el tráfico de internet debe ser tratado igualitariamente. Es decir, sin privilegiar el contenido según su marca o nombre, sitio web, plataforma, aplicación, tipo de equipamiento utilizado para el acceso o modo de comunicación. El usuario/cliente puede acceder a este tipo de contenido sin restricciones, entendiendo que posee el derecho de elegir libremente entre los recursos que ofrece internet.

Es un concepto que ha formado parte del lenguaje de internet desde sus inicios, aunque su origen proviene de principios del siglo XIX, cuando **Almon Brown Strowger** inventó un sistema telefónico automático para *"puentear"* a las operadoras telefónicas que redirigían las llamadas con fines de lucro.

No hay un acuerdo preciso sobre el significado de la neutralidad de la red y puede tomar diferentes alcances según la intención con la que se interprete. Sin embargo, se fue asentando un consenso mínimo, pero general, que entiende a la neutralidad como la prohibición de introducir distorsiones (artificiales) en el tráfico de información en internet, rechazando toda discriminación intencional de contenidos o servicios particulares.

En la red internet, el concepto de Neutralidad se basa en la premisa de que los Proveedores de Servicios de internet (ISPs) gestionen el tráfico de contenidos sin privilegiar a un participante de la red por encima de otros, conocido como "internet de dos velocidades". En este sentido, las reglas no permiten que los proveedores de banda ancha bloqueen o ralenticen o privilegien el acceso a las aplicaciones de contenidos sobre la red; o cobren más o menos a los usuarios/clientes por el acceso a ciertos contenidos o aplicaciones.

El principio de Neutralidad garantiza una internet libre y abierta, dando a los consumidores igualdad de acceso y evitando que las firmas de banda ancha favorezcan contenidos propios o de terceros. Sin este principio, los proveedores de acceso a internet podrían restringir o ampliar el acceso a determinados sitios web con el objetivo de favorecer a una empresa específica o en beneficio propio. El regulador del mercado de telecomunicaciones tiene la potestad de verificar el cumplimiento de este principio.

El punto de vista que pone en tensión el principio de Neutralidad, argumentando que la gestión y administración tecnológica de la red requiere la priorización de ciertos paquetes de contenidos por sobre otros, en una discriminación "natural" del tráfico, no diferencia tráfico del contenido. Las medidas de gestión de tráfico son una práctica habitual de ingenieros y técnicos que administran el tráfico de la red. Estas tareas permiten afrontar situaciones de saturación de canales, congestión rutas o responder a peticiones "justificables" de bloqueo producido por ataques cibernéticos, tráfico de spam o pedidos específicos de la justicia o de los usuarios.

Esta mirada se orienta a vulnerar el principio de Neutralidad y de este modo justificar las acciones que desencadenan la aplicación del principio **zero rating**. La Neutralidad se refiere a los contenidos de los paquetes que viajan por la red; este flujo lo producen los servicios de los proveedores de contenidos como Netflix, Disney, Amazon o Flow o servicios como el comercio electrónico y las redes sociales son muy diferentes en tamaño y poder económico.

Los ISPs más poderosos suelen recurrir a redes de distribución de contenidos (CDN) o suscribir acuerdos de interconexión de redes que beneficien el tráfico de las redes participantes del acuerdo (peering).

El debate por la Neutralidad de la red pone en tensión a proveedores de contenidos y proveedores de infraestructura, dejando fuera al cliente/usuario. ¿Quién garantiza la cobertura territorial y la calidad del servicio, el precio justo y la integridad y acceso social a los contenidos y servicios?

En la práctica, el contenido no se distribuye en internet en condiciones de igualdad. Es por eso que muchos ven más propicio hablar de apertura de la red en vez de neutralidad, entendiendo que la no discriminación del tráfico no es posible. La idea de una internet abierta apunta a enfocar en los resultados más que en los medios, e

implica que todos los usuarios sean tratados de la misma manera (incluyendo a los generadores de contenidos o servicios). Es la igualdad de trato hacia los usuarios la que garantizaría su plena libertad para acceder o transmitir los contenidos que prefieran. Internet como una plataforma abierta, global e interoperable para el libre tránsito de contenidos[i].

¿Concentración o medidas antimonopólicas?

En los Estados Unidos, a fines de 2017 se dio por finalizada la neutralidad de la red. Así lo determinó el ente regulador local, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Una de las consecuencias de esta decisión es que ahora las proveedoras de internet como Comcast, AT&T, Verizon y Time Warner tienen vía libre para imponer tarifas a los sitios web o plataformas de video por demanda (VOD) caso Netflix, Disney, etc. para priorizar o privilegiar la velocidad o el ancho de banda en la transmisión de sus contenidos. Los proveedores de internet argumentaron que no se podía continuar con inversiones en infraestructura y su operación ya que su facturación anual era la mitad de lo que facturaban los proveedores de contenidos, cada vez con más demanda de velocidad y ancho de banda.

En Argentina está vigente la Ley Argentina Digital que sostiene en su Artículo 57 sobre Neutralidad de red y Prohibiciones. Los prestadores de Servicios de TIC no podrán:
a) Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, degradar o restringir la utilización, envío, recepción, ofrecimiento o acceso a cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo salvo orden judicial o expresa solicitud del usuario.
b) Fijar el precio de acceso a internet en virtud de los contenidos, servicios, protocolos o aplicaciones que vayan a ser utilizados u ofrecidos a través de los respectivos contratos.
c) Limitar arbitrariamente el derecho de un usuario a utilizar cualquier hardware o software para acceder a internet, siempre que los mismos no dañen o perjudiquen la red.

Nuestra ley garantiza un estándar bastante elevado de la neutralidad porque asegura la libertad de acceso, al prohibir prácticas de bloqueo o restricción. Por otro lado, en la actualidad hay ciertas prácticas como las de *zero rating* que, si bien no están expresamente prohibidas, podrían entrar en conflicto con la ley.

Qué es el Zero Rating o Tasa Cero

El zero rating es la posibilidad que incluyen empresas operadoras de telefonía móvil para que sus clientes o usuarios no paguen por el uso del servicio de datos cuando acceden a algunas aplicaciones o servicios en internet. Es decir, su implementación comercial permite que el cliente utilice determinados servicios, aplicaciones, o plataformas sin que se contabilicen en el consumo de datos mensual.

Las prácticas de tasa cero son planes de bonificación de consumo que favorecen o impulsan el acceso a determinadas plataformas. Esto puede adoptar diferentes variantes.

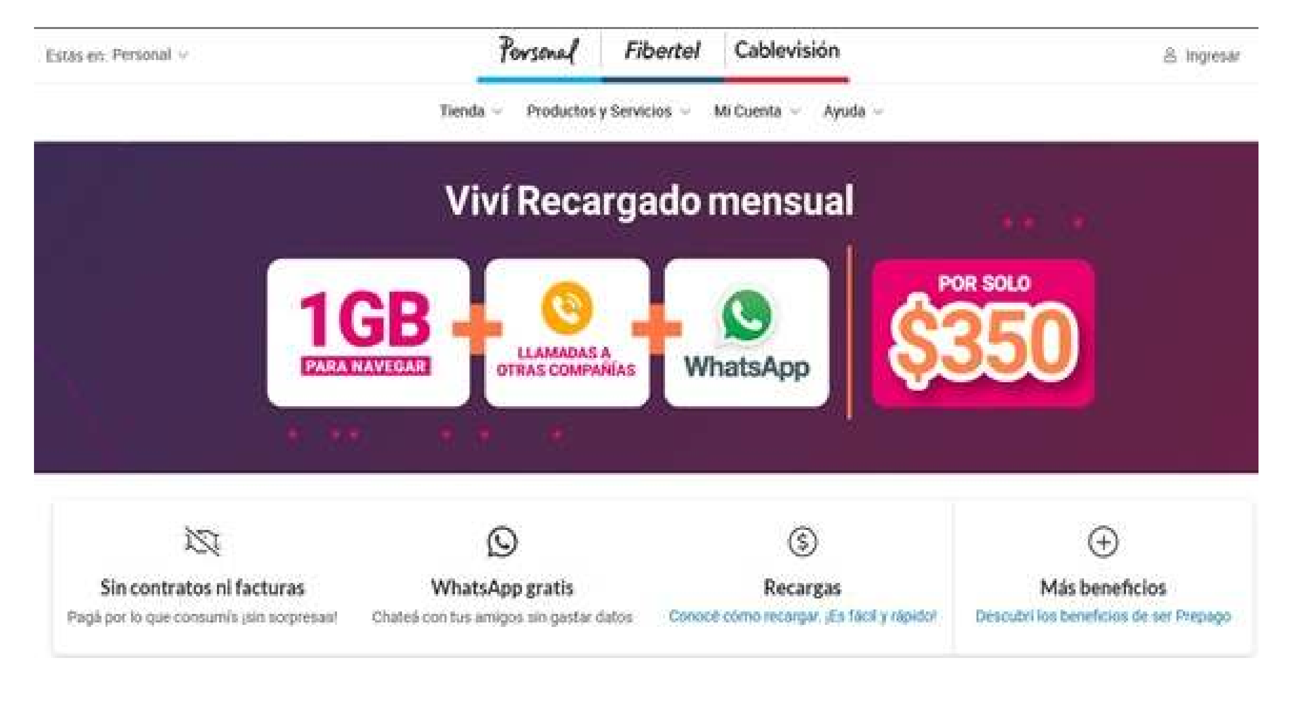
Las empresas operadoras de servicios en la red cambian y aumentan frecuentemente las opciones comerciales que tienen para el público. El objetivo es ofrecer mejores precios, y mejores prestaciones que atraigan la atención del consumidor/ciudadano que les permita crecer en su facturación, aunque ponga en tensión el cumplimiento de la norma de leyes que regulan el mercado.

Hay un modelo extremo de zero rating como el de internet.org que impulsa Facebook: por acuerdos con operadoras locales —y en varios casos también los gobiernos— ofrece acceso bonificado a versiones reducidas de su propio servicio y de una serie de aplicaciones asociadas de noticias, redes sociales o servicios gubernamentales.

Como se puede leer en el portal Electronic Frontier Fundations, India decidió rechazar los planes de tasa cero tales como la plataforma Free Basics de Facebook, mientras que en los Estados Unidos las compañías de telecomunicaciones empujan los límites con sus experimentos de tasa cero como los planes Binge-On de T-Mobile, que dio lugar a una disputa pública entre John Legere, CEO de la compañía, y la EFF, así como los planes Sponsored Data de AT&T, FreeBee de Verizon y Stream TV de Comcast.

Los planes más nocivos en los Estados Unidos, como las ofertas de AT&T y Verizon, sólo ofrecen a sus usuarios, bajo la modalidad zero rating, datos de aquellos proveedores de contenidos que pagan a las telefónicas para hacerlo. Tales acuerdos del tipo "pagar para usar" (pay to play en inglés) favorecen a los grandes proveedores de contenidos que sí pueden permitirse el lujo de pagar para estar a la vista de los usuarios, y marginan a los que no pueden, como las proveedoras de contenido sin fines de lucro, pequeñas empresas, y otros usuarios[ii].

En la Argentina, las prestadoras de internet móvil incorporan servicios ajenos para posicionar su oferta, mientras una de ellas, integrada verticalmente, también favorece sus propios contenidos. Consistentemente con la reorientación de las políticas de comunicación en favor de los actores concentrados período 2016/2019 y en particular del mayor de ellos, el regulador ni independiente ni imparcial favoreció las condiciones para la concentración existente. Favorecen decididamente la concentración en aplicaciones globales como WhatsApp integrada a Facebook e Instagram que detenta el mayor tráfico de datos que alimenta el big data de la corporación. Las redes y sus contenidos concentrados se orientan al relato universal único.



Es fundamental que haya transparencia sobre este tema. Que cada empresa informe la velocidad de datos que ofrece, si es simétrico o asimétrico y que se analice si hay alguna variación que favorezca alguna plataforma u aplicación y cuáles son las razones.

Movistar, Claro y Personal están ofreciendo un servicio de WhatsApp gratis para algunos planes. Se refiere puntualmente a que no se incurre en un gasto adicional (no se descuentan datos del plan) cuando se utiliza ese servicio de mensajería.





Esta práctica de zero rating, de algún modo, incentiva al usuario (por el ahorro que le implica) a usar WhatsApp en vez de otras aplicaciones que ofrecen el mismo servicio como puede ser Telegram, Gtalk o Messenger. En ese sentido, se puede considerar que esta práctica afecta la neutralidad de la red y favorece la concentración de aplicaciones integradas en la corporación Facebook.

Si bien la ley Argentina Digital establece un principio de neutralidad de la red, no hay una reglamentación que especifique en concreto los procesos de aplicación. Sería adecuado que el Gobierno o el ente regulador Enacom estableciera un reglamento específico que fije las prácticas concretas de neutralidad como se hizo en otros países, incluidos Chile y Perú en la región.

En la actualidad, los usuarios clientes de las empresas proveedoras de internet, no podemos estar seguros de que los servicios de internet contratados no estén degradando un servicio por sobre otro o la velocidad y consumo de ancho de banda sin que nos enteremos.



La existencia de prácticas de **zero rating** en la Argentina evidencia las falencias de la actual regulación e implementación de la Ley Argentina Digital en cuanto a protección de la neutralidad de la red. A la vez, esta situación nos alerta sobre la necesidad de ajustar la normativa vigente de modo que sea eficaz en los hechos con el fin de que, tanto usuarios finales como proveedores de contenidos, cuenten con una herramienta útil para hacer frente a los abusos de parte de los IPSs y empresas proveedoras de contenidos con poder de mercado, sobre todo considerando la naturaleza oligopólica que han adquirido en nuestro país en los últimos años.

Este tipo de prácticas genera numerosas transgresiones a los derechos de usuarios y proveedores de contenidos y, en consecuencia, ponen de manifiesto la necesidad de implementar medidas efectivas por parte de los Estados, a los fines de dar cumplimiento a su deber de garantizar el goce de derechos protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La protección de la neutralidad de la red es necesaria en el contexto convergencia digital. Nos permite limitar la tendencia del mercado info-comunicacional a la concentración y resguardar el derecho a la información de la población.

En el momento de poner foco en las plataformas como servicio info-comunicacional. En el territorio digital es donde se despliegan jugadores globalizados que escapan a la territorialidad del Estado Nación. El desafío es cómo evitar que la regulación se delegue a intereses privados. Aunque haya sido especificado en la normativa, el zero rating es una de las violaciones a la neutralidad más toleradas.

Durante el 2020 se logro un acuerdo a nivel nacional, entre la Secretaría de Políticas Universitarias, Enacom, el Ministerio de Educación y las empresas Telecom-Personal, Movistar-Tuenti y Claro, sobre liberación de consumo de datos (zero rating) en el acceso a portales y servicios web de las 57 Universidades Nacionales en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Entre las nuevas implementaciones, se introdujo un software para que docentes y estudiantes puedan desarrollar videoconferencia. También, las clases sincrónicas, juegos, debates, trabajos colaborativos van a estar disponibles para todas y todos desde celulares sin consumo de datos y computadoras gracias a la colaboración de ENACOM, ARSAT y las empresas de telecomunicaciones de la Argentina. Así, se logró alcanzar una infraestructura soberana, con datos protegidos y una navegación gratuita.[i]

Las prácticas que transgreden el principio de neutralidad también representan una amenaza para la privacidad y la intimidad de los usuarios. Esto nos obliga a considerar el vínculo entre neutralidad de la red y la vigilancia digital. La posibilidad de los ISPs de discriminar el acceso a los contenidos, favoreciendo a unos y prohibiendo y/o estrangulando a otros, deja en evidencia que, de esta manera, se puede acceder a todos los datos que circulan por la red.

Para la salud de la democracia, no es admisible dejar librado a las empresas proveedoras de conexión a internet las decisiones en torno al tratamiento de los datos que circulan en ella. Sobre todo, considerando que la concentración existente en el mercado local con Cable visión Holding configura un escaso nivel de competencia entre ISPs e incrementa proporcionalmente su poder en el mercado y su capacidad de condicionar tanto a proveedores de contenidos, como a usuarios y, más aún, cuando generan sus propios servicios y contenidos comunicacionales el riesgo es la democracia representativa.

El peso político-económico del sector info-comunicacional, condiciona imperativamente cualquier debate en torno a la neutralidad de la red. En consecuencia, se torna fundamental la intervención de los Estados a la hora de

encarar políticas públicas que actúen en favor de garantizar los derechos digitales de los ciudadanos, en detrimento de la concentración y centralización de la propiedad o de los insumos necesarios para prestar el servicio.

La información pública debe proveer a los ciudadanos datos sobre los proveedores de internet, de modo inteligible y transparente respecto a las prácticas de manejo de tráfico y políticas de uso, respecto a la coexistencia de servicios de acceso a internet y servicios especializados. Cuando la capacidad de red se comparte entre servicio de acceso a internet y servicios específicos, el criterio que se comparte debe ser expresado claramente.

En este sentido, si internet se mantiene como una plataforma abierta, innovadora y neutral dependerá en gran medida del tipo de regulación que se acabe aplicando como política pública. La emergencia de la Covid pone de manifiesto el valor estratégico de contar con una infraestructura de red y su operación independiente de los objetivos corporativos que han mostrado y muestran el criterio de mercado con faro de su gestión. La soberanía tecnológica y los servicios TIC al pueblo necesita filtrar las políticas comerciales.

Alfredo Moreno *es Ingeniero TIC en ARSAT. Profesor de TOC en Universidad Nacional de Moreno*

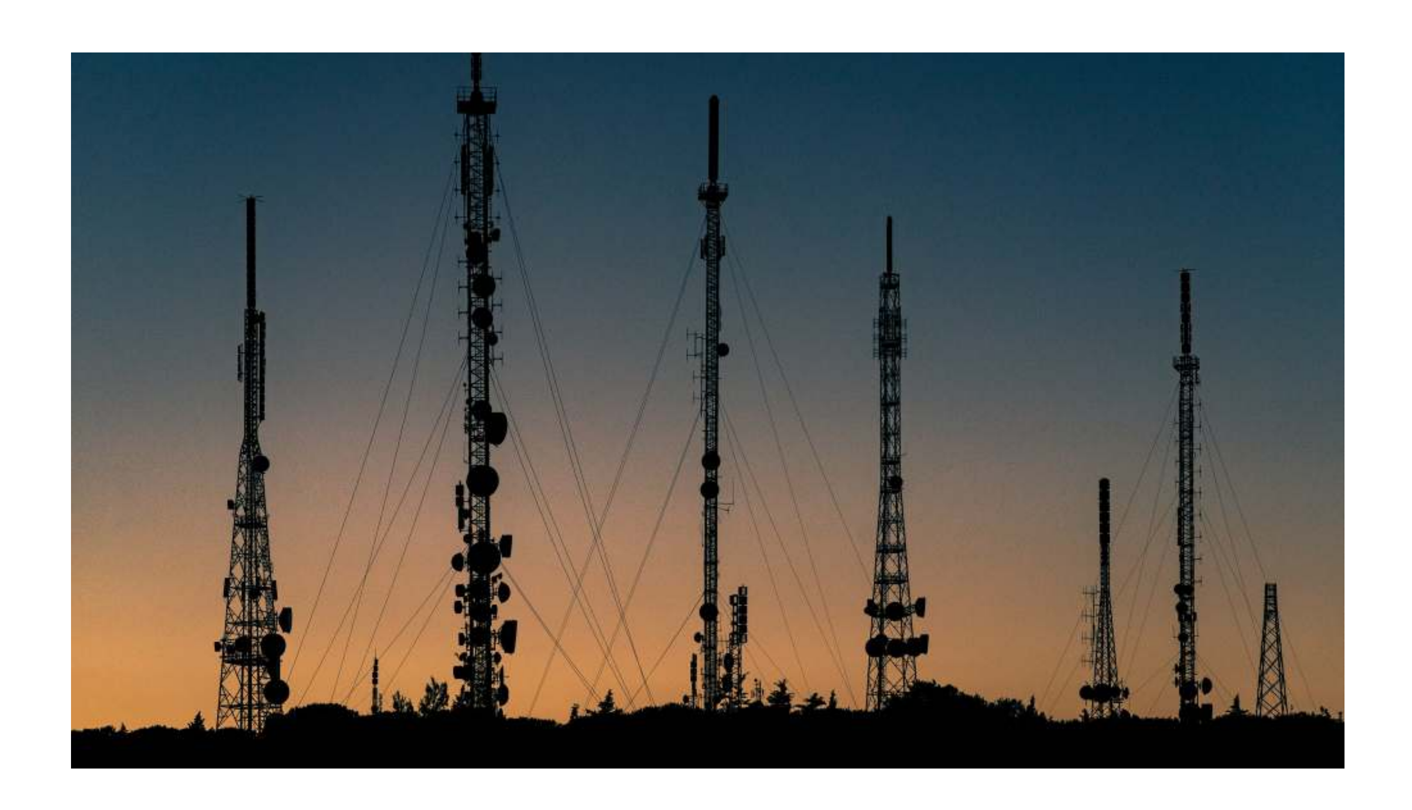
---

[i] https://www.argentina.gob.ar/noticias/trotta-presento-los-avances-del-plan-federal-juana-manso

[i] http://papel.revistafibra.info/la-neutralidad-la-red-zero-rating/

[ii] https://www.eff.org/es/deeplinks/2016/02/tasa-cero-zero-rating-que-es-y-por-que-deberia-importarte

Publicado originalmente en *Revista Mugica*





El sujeto social de la pospandemia. ¿Otra colonización cultural?

Por Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) / Aram Aharonian

Tomemos conciencia del mundo en el que nos ha tocado vivir. El derretimiento de los polos, las sequías, aumento de la temperatura, incendios y tantos otros ejemplos chocan con la ceguera de los políticos que no quieren ver o son partícipes necesarios del genocidio. El problema hoy es que se agota el tiempo. La Pandemia llegó a profundizar la crisis de carácter político, económico y de dominio hegemónico.

Nos encontramos en un momento en el que la Clase Capitalista Transnacional o Global, necesita reestructurar la economía. Las grandes empresas tecnológicas son hoy las que están experimentando enormes aumentos de ingresos durante el encierro de un tercio de la humanidad. En EEUU la elite más rica aumentó sus riquezas en 240 mil millones de dólares. Y las grandes corporaciones del sector de salud, del sector tecnológico, van a estar experimentando un boom en sus ganancias, por lo tanto, estamos frente a una mayor concentración y centralización del capital a escala global.

Vivimos una pandemia sobre todo cultural, mediados por la virtualidad, tanto en la educación, la recreación, el trabajo y hasta en la sexualidad. Claro, sin tener en cuenta la enorme brecha digital en nuestras sociedades. Y una de las pocas seguridades que tenemos, es que viviremos en un mundo que será más digital. Pero ¿quién va a controlar los nuevos sistemas de información y los sistemas de

seguimiento que permiten conocer prácticamente todos los desplazamientos de una persona? ¿Quién va a controlar la digitalización masiva de la vida, las grandes empresas tecnológicas o estados autoritarios?

El coronavirus parece ser la fecha que en el futuro se usará como símbolo del cambio histórico económico y político hacia la digitalización de la economía, la financiarización, la moneda virtual, hacia la materialización de nuevas relaciones sociales. ¿Pasaremos del fetichismo de la mercancía al fetichismo de la virtualidad?.

Eso plantea nuevas cuestiones sobre la organización de la vida social y de los equilibrios de podera escala internacional. La lucha por el reparto del mundo pos covid19, ya empezó. Los grupos dominantes van a utilizar el desempleo de masas para intensificar la superexplotación de la clase obrera global, hoy muy informalizada y precarizada, e imponer mayor disciplina a los trabajadores, junto a una masa que ha sido expulsada de los circuitos de producción. ¿Sobrevivirán las pequeñas y medianas empresas? ¿Volveremos al trueque? Cuando creímos que teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas.

Y entonces, ¿cuál será el sujeto social de la pospandemia? No será el proletariado, sino las clases subalternas, todos los excluidos del sistema capitalistas, aquellos que no forman parte del uno por ciento más rico del planeta. Para algunos analistas, la vanguardia será la mujer por ser quien presenta las condiciones objetivas y subjetivas de la expropiación capitalista y múltiples explotaciones (raciales, sexuales, salariales).

El feminismo ha mostrado su capacidad de construir contrahegemonía, universalizar consignas, construir programas y visibilizar el estado opresor contra las clases subalternas. El feminismo ha mostrado su capacidad de construir contrahegemonía, universalizar consignas, construir programas y visibilizar el estado opresor contra las clases subalternas. Es un movimiento que el capital pretende cooptar.

Mientras se está produciendo un cambio de paradigma a nivel global con la irrupción de la mujer en todas las actividades humanas, lo que antes hubiese sido impensable. Las nuevas generaciones, armadas de una tecnología y visión global, tienen ya la responsabilidad de enmendar los gruesos errores cometidos por las generaciones precedentes, con el deber de actuar con decisión para evitar catástrofes mayores, reformulando nuestra forma de vida.

Los recursos naturales se agotan, pero nuestros gobiernos siguen especulando con la explotación de los mismos en lugar de buscar soluciones en la digitalización de la ruralidad, por ejemplo, para garantizar la alimentación. El sector de campesinos, mucho de ellos indígenas, producen el 60% de los alimentos que comen los habitantes de las ciudades en América Latina y El Caribe. La riqueza se concentra cada vez en menos manos, y los seres humanos nos aislamos para sobrevivir.

Hay que repensar todo porque ya nada será igual. Quizá todo el conocimiento adquirido sirva para saber que no va a servir para las próximas décadas cuando, por ejemplo, haya que hacer frente al mantenimiento de la red eléctrica, una infraestructura de una gran complejidad física y operacional, la primera en fallar debido a la escasez de combustibles fósiles. Los actuales niveles de la electrónica de

consumo son completamente insostenibles y en el curso del descenso energético se va a producir una simplificación enorme de la informática. Se deberá establecer una verdadera informática de guerra ante el descenso energético

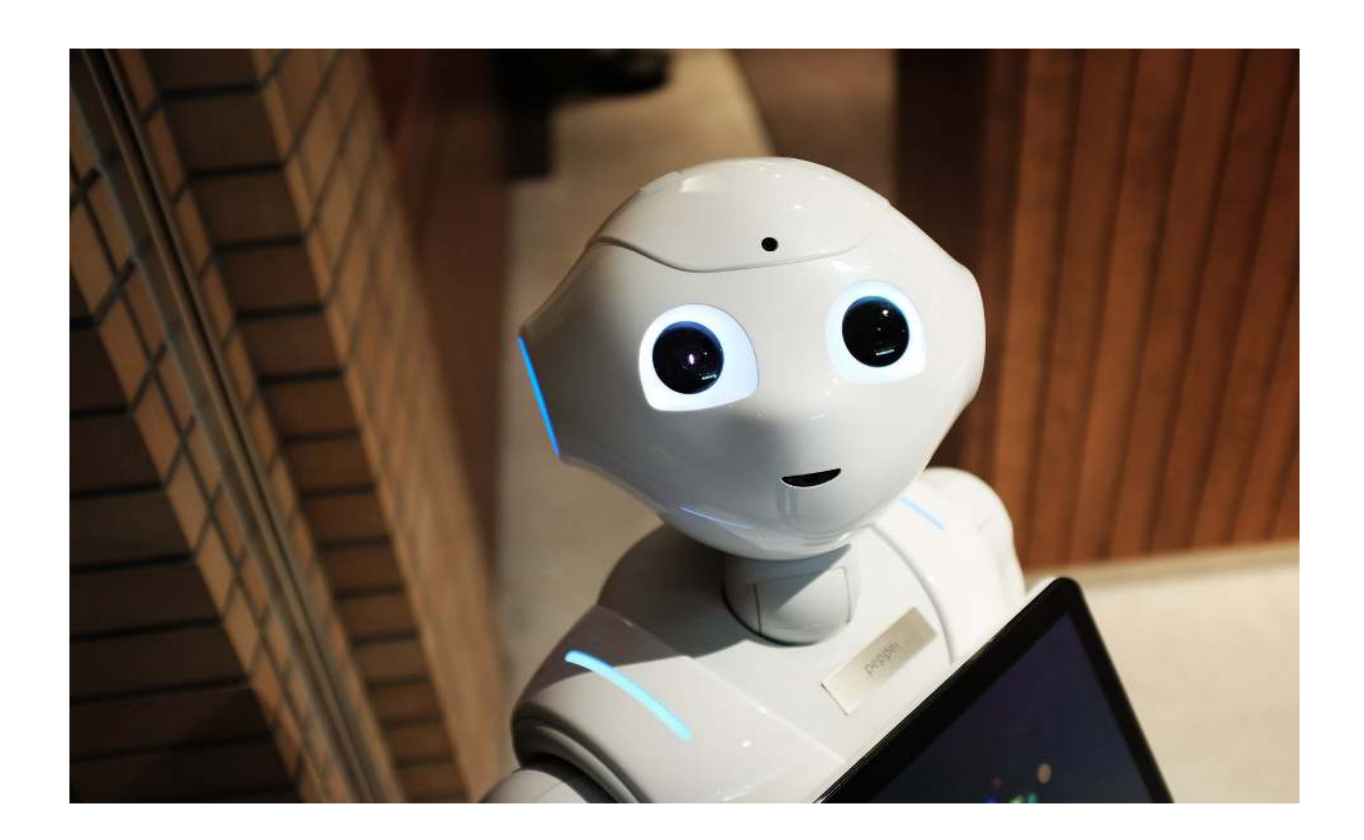
Todo se manejará sobre plataformas, no habrá más relaciones cara a cara, y eso traerá nuevas percepciones, nuevas sensibilidades, incluso nuevos valores y sentimientos. Pero, sobre todo, nuevas formas de un capitalismo esclavizante, quizá como lo fuera el pasaje del feudalismo al capitalismo. Las plataformas serán los amos, y los «esclavos libres», trabajadores que pondrán sus tiempos en las plataformas que recibirán a cambio puntos (o cualquier mediación) para canjear por lo que requiere sólo para vivir, ya que no será necesario la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero vale la pena recordar que sólo el trabajo es lo que genera valor.

Para bien o para mal, se deberá reconstruir el mundo, pero para eso ya no sirven las viejas fórmulas ni los dogmas. Nos enfrentaremos a lo desconocido, después que miles y miles de personas han muerto por la pandemia o por la falta de acceso a los servicios sanitarios. Por ahora, la polarización política se da entre una izquierda surgente y/o insurgente y fuerzas ultraderechistas, que siguen ganando adeptos en el mundo. La derecha, el capitalismo, utilizará el desempleo y el empobrecimiento masivo para imponer mayor disciplina y austeridad, para morigerar los efectos del hundimiento de la economía global, en su camino para consolidar un estado policial de vigilancia global.

Mientras, el Fondo Monetario Internacional garantiza que nuestros pueblos no salgan de la miseria. Acaba de realizar préstamos a once países de la región por 343 mil millones de dólares, pero obviamente condicionándolos a los ajustes estructurales, colaborando con el diseño del nuevo capitalismo pospadémico. Y los gobiernos de nuestros países siguen anteponiendo el pago de las deudas odiosas a las necesidades de los pueblos. En la actualidad, alrededor de 190 millones de latinoamericanos viven en situación de pobreza y 65 millones en situación de pobreza extrema; hay más de cinco millones de niños con desnutrición crónica, y la mayor parte viven en zonas rurales.


Este artículo forma parte del dossier PAPELES PARA DIALOGO. Concentración mediática, colonialismo cultural y terrorismo comunicacional / CLAE





OPINIÓN

¿Inteligencia Artificial o Inteligencia Humana?

Por Cristián Opaso

No son necesariamente lo mismo y, es más, la primera sin la segunda nos podría llevar -¿o nos está llevando?- a un despeñadero de consecuencias impredecibles. “Pero si la inventamos los seres humanos”, podría decir usted. “Una sin la otra, simplemente no van”, podría agregar.

Yo diría que sólo hemos vislumbrado las posibilidades de la inteligencia humana y que sin un esfuerzo cualitativamente superior, sin una verdadera revolución mental, no seremos capaces de que una de las más complejas maquinarias creada por la humanidad, o sea la inteligencia artificial, sea de verdad inteligente y esté al servicio de la evolución de la humanidad. Especial preocupación nos merece aquel enjambre de tecnologías duras y blandas (hardware y software) que desde las plataformas privativas, monopólicas y de alcance mundial, parecen habernos secuestrado privacidad, interacción e imaginación. Porque a fin de cuentas sería una gran ilusión que usted crea que realmente, de manera consciente, elige que información recibir, cual seleccionar y qué compartir. Son los algoritmos, las complejas operaciones matemáticas desarrolladas por las plataformas comerciales, las que priorizan el tráfico de acuerdo a sus intereses, que no son más que aquellos de los mercaderes cuyo principal interés es vender y crecer a toda costa.

Me lo dijo con precisión alguien, cuyo nombre exacto nunca supe, en uno de aquellos encuentros de apariencia fortuita que a veces nos revelan verdades que perduran por largo tiempo. La breve conversación tuvo lugar en un apretado vagón del tren subterráneo Santiaguino (poco antes de la pandemia). Breve, pero memorabilísima. Como para provocarme a pensar y elaborar este escrito.

Le metí conversa atraído por su interesante aspecto de intelectual y sus manos cargadas de libros.

“¿Es usted profesor de Química?..¿en la Universidad de Chile, la de Santiago o la Católica? ” pregunté, así como de la nada.

“No, vivo en Londres”, me contestó, agregando que había venido a un seminario a la capital Chilena.

Y él también, así como de la nada, en un momento me lo dijo todo.

“La próxima revolución es la de la Mente” me musitó.

“Tú sabes...la revolución industrial, pues bien... ahora viene la Mente”, agregó, para dictaminar con precisión:

“La Inteligencia Artificial tiene que ser dirigida por la Mente. De lo contrario, no será en beneficio de la humanidad.”

Estamos en la encrucijada

Ciertamente que la regulación de las plataformas digitales -y su descarada recolección y venta sin control de nuestro datos personales- pasa por nuevas políticas públicas a nivel nacional, regional y, especialmente, a nivel global. En este sentido los países europeos parecen ir a la delantera.

Pero connotados pensadores coinciden y complementan lo que me decía el sabio caballero que conocí en el subte: que sería necesario un radical cambio cultural y hasta conductual para controlar esta tormenta tecnológica.

Lo planteó desde el espacio televisivo que tiene en DW, la televisión alemana, el ex-preso político y luego Presidente Uruguayo José “Pepe” Mujica:

“..El mundo digital y la inteligencia artificial deben de cumplir el papel de ser servidores de la vida humana y no al revés, servidor de lo contrario.” dictaminó, con más años encima, desde su granja en las afueras de Montevideo.

“Esto implica un cambio de lógica, un cambio cultural del cual estamos lejísimo ..”, agregó.

“...La puerta que abre este avance y este proceso tecnológico lo posibilitan siempre y cuando podamos cambiar las raíces culturales que nos gobiernan. Estamos con una arsenal cultural que pertenece a otros tiempos, entrando en un tiempo distinto. Nada es mas importante que la batalla cultural por el cambio de nuestras reacciones subliminales”, continuó Mujica.

“¿Podremos?” se preguntó, mencionando, sin creérselo mucho, aquello que en una ocasión le dijera un amigo.

“El socialismo no es posible porque el hombre es malo”

Otro que se lo plantea -e intenta responder- es un tal Siva Vaidhyanathan, profesor de la Universidad de Virginia de EEUU y director de su Centro para las Comunicaciones y Ciudadanía (Center for Media and Citizenship)

“..Lo que realmente necesitamos es rehumanizarnos. Ese es el trabajo difícil y de la largo aliento.” planteó Vaidhyanathan en una entrevista con el programa de televisión alternativo estadounidense Democracy Now:

“ Sí, puedo proponer unas cuantas intervenciones regulatorias y, sí, marcarían una diferencia.. pero no la suficiente. ..”, señaló el profesor.

“Si realmente queremos mitigar el daño hecho por Facebook, tenemos que invertir nuestro tiempo y nuestros recursos en instituciones que nos hagan pensar, que nos ayuden a pensar claramente, que pueden certificar la verdad, que pueden brindar espacios de deliberación y debate. ¿no es cierto? Instituciones como el periodismo, instituciones como las universidades, las bibliotecas públicas, las escuelas y otros espacios públicos....”, agregó, exhortando a reaprender las maneras de relacionanos.

“Necesitamos poner nuestro tiempo y nuestra energía en la política del cara-a-cara, de manera de poder mirar a nuestros oponentes a la cara, reconocerles como seres humanos y, en una de esas, lograr un cierto re-acercamiento, o una mutua comprensión y respeto. Sin eso, no hay esperanza...no podemos pensar colectivamente”.

“No podemos pensar con la verdad. Simplemente, no podemos pensar. Necesitamos construir, o reconstruir -si alguna vez la tuvimos- nuestra capacidad de pensar”.

¡Piénselo!

Cristián Opaso *es periodista chileno*





Un llamamiento desde Palestina:

Unidos contra la cibervigilancia y la represión

Por el Comité Nacional Palestino de Boycott, Desinversión, Sanciones (BDS)

El creciente escándalo internacional en torno al software espía Pegasus del Grupo NSO israelí, utilizado por dictaduras y regímenes autoritarios para perpetrar numerosos crímenes y violaciones de los derechos humanos, es solo la punta del iceberg.

Durante años, Israel y sus empresas de alta tecnología han exportado programas espía y otras tecnologías de vigilancia intrusivas a todo el mundo, incluso a algunos de los regímenes más despiadados. El comercio de tecnología militar, de seguridad y de vigilancia constituye la base de los vínculos de Israel con el resto del mundo. Esta tecnología es un resultado directo de la investigación y la práctica que sostiene el apartheid israelí en su represión contra el pueblo palestino. La vigilancia masiva y selectiva de los palestinos indígenas privados de sus derechos básicos y del recurso a la justicia es una característica fundamental del sistema israelí de represión, opresión y desposesión colonial.

El ejército de Israel, en colaboración con sus universidades y centros de investigación, no sólo ha desarrollado la tecnología y la metodología utilizadas para subyugar y oprimir a los palestinos. También ha creado un elaborado sistema que canaliza su tecnología militar y de vigilancia masiva "probada en el terreno" hacia el rentable mercado mundial de la industria de la vigilancia. Ha transformado su Unidad

de Inteligencia Militar 8200 en una incubadora de empresas, promoviendo agresivamente sus capacidades, incluyendo el hecho mismo de que están arraigadas en la opresión del pueblo palestino.

En 2020, las empresas cibernéticas israelíes recibieron aproximadamente el 31% de la inversión mundial en el sector. Las adquisiciones de empresas cibernéticas israelíes generaron unos 4.700 millones de dólares, y las exportaciones cibernéticas israelíes se situaron en 6.850 millones de dólares. Israel se ha convertido en un líder en el mercado del software espía y la vigilancia, proporcionando experiencia para la recopilación y el procesamiento de datos, incluyendo software espía, reconocimiento facial, "herramientas de seguimiento de usuarios" que se utilizan para la vigilancia, la manipulación electoral, y más. Vende esta tecnología a gobiernos democráticos, contribuyendo a la constante erosión de los derechos civiles, y a regímenes autoritarios, permitiendo y agravando sus actuales abusos de los derechos humanos, como confirman las revelaciones del Proyecto Pegasus en curso.

El régimen despótico de Arabia Saudí había utilizado el programa espía Pegasus en el seguimiento del disidente saudí Jamal Kashoggi, que fue brutalmente asesinado en la embajada saudí en Turquía en 2018. Las familias de los 43 estudiantes de bachillerato de Ayotzinapa (México), asesinados y desaparecidos en 2014, fueron objetivo del programa espía israelí mientras luchaban por la justicia. Pegasus se utilizó también en la persecución de activistas y abogados en el caso de Bhima Koregaon en la India.

La investigación sobre el NSO Group, su programa espía Pegasus y el menos conocido Circles, ha revelado la íntima cooperación entre el ejército, el Estado y las empresas dentro del régimen de apartheid de Israel y deja al descubierto la puerta giratoria que ha creado el complejo militar-industrial israelí. El ministro de defensa israelí se encarga de regular al NSO Group, concediendo licencias individuales de exportación y el NSO, a su vez, está dispuesto a vender su tecnología cuando el gobierno israelí está interesado en avanzar en los lazos diplomáticos apoyando a regímenes represivos y autoritarios en el mundo árabe, África, Asia, América Latina y más allá. La comunidad de inteligencia estadounidense asume que Israel tiene acceso a los datos recogidos ilegalmente a través de Pegasus. No es de extrañar que el gobierno israelí esté creando un grupo de trabajo para gestionar la crisis generada por las últimas revelaciones.

No se trata sólo del NSO Group: es hora de poner fin a las empresas de cibervigilancia ahora.

Como dice Edward Snowden: "Sus únicos productos son vectores de infección. No son productos de seguridad. ...No fabrican vacunas: lo único que venden es el virus".

Desde hace casi dos décadas, a medida que la tecnología digital ocupa el centro de nuestro mundo, la vigilancia masiva y el espionaje selectivo han quedado al descubierto como medios de los Estados autoritarios y las empresas para vigilar, controlar, manipular y reprimir a activistas, periodistas y gente corriente. Esta represión global, gran parte de la cual se origina en la matriz de vigilancia-militar de Israel, debe ser desafiada por todos nosotros, juntos.

Hacemos un llamamiento a los movimientos por la justicia, a las organizaciones progresistas y a las personas de conciencia de todo el mundo para

- Unirse a nosotros en la campaña para prohibir la cibervigilancia y poner fin a su papel en la violación y erosión de los derechos humanos y cívicos.

- Detener los negocios sucios -y mortales- del NSO Group en todo el mundo.

- Pedir el fin de las relaciones militares y de seguridad con el apartheid israelí.

> *Publicado originalmente en https://www.bdsmovement.net/news/call-from-palestine-unite-against-cyber-surveillance-repression*

Para compartir



